

C.A. de Santiago

Santiago, ocho de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 4 de julio de 2019 compareció don Omar Alejandro Ruiz Rodríguez quien dedujo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley N° 21.000, reclamo de ilegalidad en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante CMF), respecto de la Resolución Exenta N° 2738 de la Comisión para el Mercado Financiero y Resolución Exenta N° 59 del Superintendente de Pensiones (en adelante SP), de fecha 14 de Mayo de 2019, que los sancionan a 9 meses de suspensión de su actividad como asesor previsional, y al pago de la multa equivalente a UF 100, las que fueron recurridas de reposición dentro de plazo legal, recurso que fue rechazado por Resolución Exenta N° 3439 de la CMF y Resolución Exenta N° 75 del SP, ambas de fecha 17 de junio de 2019, las que han sido dictadas en el ejercicio de una Comisión Especial integrada por a) el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero; y b) el Superintendente de Pensiones, estimando que dichas resoluciones resultan ilegales, solicita se acoja el presente reclamo, y en definitiva se declaren ilegales las resoluciones impugnadas.

Expone que la CMF y la SP, han formado una Comisión Especial Integrada por el Consejo de la CMF y el Superintendente de Pensiones, atribuyéndose la competencia y jurisdicción, para conocer y sancionar respecto de hechos ocurridos, con anterioridad a la dictación de la Ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, la que fue publicada en el Diario Oficial con fecha 13 de diciembre de 2017. Expresa que, es más, la entrada en funcionamiento de la CMF es de fecha 15 de enero del año 2018.

Refiere que el actuar de la Comisión Especial indicada, al conocer, investigar y sancionar a su representado por hechos anteriores a su creación, la han convertido en una Comisión Especial, y con ello se



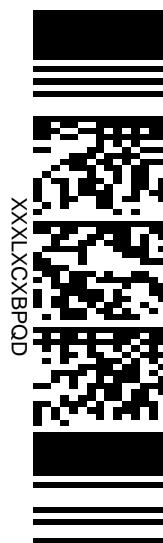
ha vulnerado el derecho al debido proceso legal, consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Constitución Política de la República.

Explica que en la Ley N° 21.000 no existe la autorización expresa para que la Comisión cuestionada pudiese haber conocido de aquellos hechos acontecidos con anterioridad a su creación, lo que la transforma en una comisión especial, lo que expresamente prohíbe y garantiza la Carta Fundamental a todas las personas, en su artículo 19 N° 3 inciso quinto.

En conformidad a lo expuesto precedentemente, la actuación de dicha comisión especial, son ilegales e inconstitucionales, lo que alcanza tanto a la investigación que fue el fundamento de la formulación de cargos del fiscal, como asimismo a lo decidido por dicha comisión en las resoluciones que lo sancionan. Asevera que dichos actos administrativos, han sido recurridos de reposición, recurso que fue rechazado por la misma comisión especial, lo que la transforma también en ilegal e inconstitucional lo que amerita la presentación del presente recurso.

Señala que según lo expuesto en las resoluciones recurridas en el considerando I.2., los hechos materia de la presente investigación, se refieren a que su parte, habría proporcionado datos de carácter personal de sus clientes a un tercero (Andrés Orrego Arriagada) para que éste adulterara Certificados de Ofertas Scomp versión “Copia”, transformándolos en una versión falsa del “Original” de dicho Certificado, documento necesario para realizar el trámite de aceptación de oferta y selección de modalidad de pensión. De ese modo el investigado hizo un uso no autorizado de la información personal de sus clientes, recopilada producto de la tramitación de sus pensiones, para acelerar el trámite de sus pensiones y con ello obtener la correspondiente comisión por el caso.

Alega que en la relación de los hechos se incorporan antecedentes que no son efectivos y que se dan por probados sin que exista prueba alguna de ello, lo que sin lugar a dudas lleva a una errónea apreciación de los hechos al introducir a ellos una intención



dolosa que no existió (para que éste adulterara Certificados de ofertas Scomp) lo que lleva a una errada calificación jurídica de los mismos, y como consecuencia de ello, se produce la ilegalidad interna del acto administrativo o también denominada en la motivación del acto administrativo, como se define en doctrina.

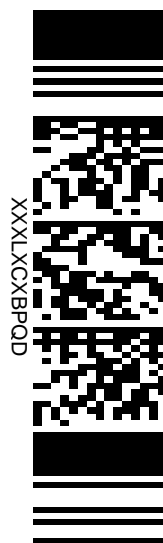
Expone que en la investigación y en la prueba testimonial rendida por su parte, estima que quedó acreditado que los antecedentes entregados a este tercero, se hizo con el convencimiento que éste tenía una amiga en la empresa Sonda y que le entrega los Certificados Originales y por ello que su parte había sido engañada, y que de no mediar ello, el hecho no se hubiese efectuado.

Pues bien, los hechos descritos llevarían a una sola conclusión, y ésta es, que estamos frente a actos continuos y deben ser tratado como un solo hecho y una sola norma infringida, el N° 7 de la sección IV a V, de NCG N°228 CMF, referente al procedimiento al obtener un documento Scomp, en forma distinta a la establecida en el procedimiento y hacer uso de éste, documento que en definitiva resultó ser no original, en atención que ésta figura subsume cualquier otra que tenga relación a la obtención de Certificado Scomp, fuera del procedimiento establecido por la NCG N°228 CMF; y el no haberse considerado así, existe una errónea calificación jurídica de los hechos.

En este sentido, sostiene que se infringe el artículo 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880, en atención que la ley exige que las resoluciones que ponga fin al procedimiento, contendrá la decisión, que será fundada.

Agrega que en la audiencia del día 9 de mayo de 2019, realizada ante la CMF, solicitó ante la Comisión tener en consideración al momento de dictar la Resolución en el caso que ésta fuese condenatoria, los siguientes antecedentes no considerados finalmente:

a) Que hubo colaboración por su parte, antes o durante la investigación, pues en su declaración señaló que había adquirido los Scomp de parte de Andrés Orrego Arriagada. Sin embargo, la Resolución o el Acto Administrativo recurrido, no lo considera, a pesar que en la misma Resolución Considerando I.4 (pág. 3) señala: “ 4. El



Investigado según su declaración pagó en efectivo al Sr. Orrego Arriagada una suma de dinero por cada Certificado de Ofertas Scomp versión “copia adulterada” requerido. Pues bien, con lo expuesto queda claro que ha existido colaboración con la investigación, toda vez que el propio investigado confiesa su participación en los hechos. Sin embargo, no se considera ello al momento de dictar la Resolución Exenta Recurrida, lo que vulnera el artículo 52 de la Ley 21.000.-

b) Que para el caso que la Resolución fuese condenatoria, solicitó se considere que, en cuanto al beneficio económico y su capacidad que éste hubiese obtenido con el hecho materia de la presente investigación, éste se sujetara sólo a aquellos casos que se le permite sancionar a la comisión conforme el artículo 61 de la Ley 20.000. Pues bien, el acto administrativo recurrido al momento de sancionar, toma en consideración la capacidad económica del investigado en base a la información proporcionada por el sistema Scomp, por el cual se pudo constatar que, durante el año 2017, por concepto de asesoramiento, ventas de rentas vitalicias y retiros programados presentó un ingreso de UF 3049,5.- Es el caso que, el parámetro que ha tomado en consideración para fijar la multa, resulta desproporcionado toda vez que, sólo dos casos son aquellos por los cuales se sancionó a mi representado, de modo tal que la obtención de ganancias por esos casos, de modo alguno alcanza los UF 3.049,5, además, no existe un análisis respecto de cómo se llega a determinar el monto de la multa de 100 Unidades de Fomento a la cual fue condenado. De este modo se ha vulnerado el artículo 52 de la Ley N° 20.000.-

c) Que, al momento de dictar la resolución sancionadora, considerar que durante los últimos cuatro años no ha tenido sanciones previas. Sin embargo, la decisión impugnada consideró la Resolución Exenta N° 250 de 12 de mayo de 2009, que aplicó la sanción de censura por el incumplimiento en la obligación de contratar dentro de plazo la garantía exigida para desarrollar sus operaciones. Aclara que es el caso que, dicho antecedente jamás se debió haber tomar en consideración, toda vez que si a la Comisión se le prohíbe sancionar por hechos



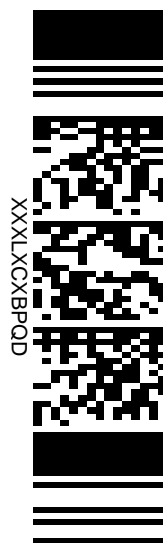
acontecidos hace más de cuatro años atrás, con mayor razón se le inhibe de tomar en consideración hechos acontecidos hace más de 4 años, desde la fecha de la resolución, ello vulnera el artículo 61 de la Ley N° 21.000, al considerar hechos prescritos.

d) Por último, solicitó que, de haber resolución sancionatoria, en cuanto a suspensión, se considerara los 180 días que ha sido suspendido de la actividad de asesor provisional, durante la tramitación de la presente investigación. Indica que es el caso que, al momento de dictar el acto administrativo que se impugna en esta presentación, en él no se hace ninguna mención ni análisis a dicha solicitud, simplemente se omite pronunciamiento al respecto. Es el caso que al no considerar los 180 días o seis meses que mi representado ha estado suspendido de ejercer la actividad de asesor provisional, hace que se vulnere éste artículo, toda vez que, al aplicar una sanción de nueve meses, implica que en definitiva se encuentre suspendido por más de un año, que es lo permitido por la ley, lo que hace que la resolución impugnada sea ilegal al aplicar una sanción mayor a la que permite la legislación. También se vulnera el artículo 52 de la Ley N° 21.000, al haber omitido pronunciamiento respecto de esa alegación, en cuanto se considere el tiempo por el cual ha estado suspendido mi representado.

Manifiesta que las ilegalidades denunciadas al no respetarse el artículo 52 inciso 2 de la Ley N° 21.000 en la dictación de la resolución recurrida o acto administrativo sancionatorio recurridos, produce perjuicio a don Omar Ruiz Rodríguez, toda vez que, de haberse considerado sus defensas, hubiese sido absuelto o la sanción hubiese sido considerablemente menor, y la suspensión estaría cumplida.

SEGUNDO: Que, al evacuar su informe, la CMF solicitó el rechazo del reclamo. Detalló que, mediante la resolución impugnada, se sancionó al recurrente por las siguientes infracciones:

a) Infracción a lo dispuesto incisos once y doce del artículo 61 bis del D.L. N° 3.500 de 1980 y número 1.1. letra b) de la Norma de Carácter General N° 221 de la CMF; y en el Libro V, Título VIII, Capítulo II, Número 1, Letra b) del Compendio de Normas del Sistema de



Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980, ya que el Recurrente, en el periodo de julio de 2014 a agosto de 2016, no resguardó la privacidad de la información de 29 de sus clientes, haciendo uso no autorizado de sus datos personales.

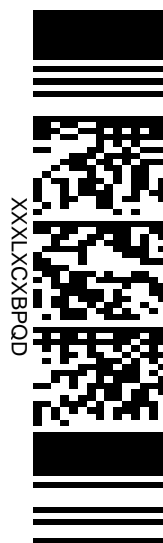
b) Infracción al número 7 de la Sección IV, a la Sección V, a la Sección VI, el número 2 de la Sección XII de la NCG N° 218 de la CMF; y en el Libro III, Título II, Letras E, F, G y M capítulo II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980, en tanto el Recurrente, en el periodo de julio de 2014 a agosto de 2016, efectuó en, 29 casos, la aceptación de oferta y selección de modalidad de pensión sin la utilización de Certificados de Ofertas SCOMP versión “Originales”.

Expresa que sin embargo, debe precisarse que respecto de los hechos imputados al Investigado y acreditados en la investigación, existieron en cada cargo 27 casos en que las conductas se realizaron hace más de 4 años contados desde la resolución sancionatoria y que no fueron considerados a efectos de la sanción de multa de 100 UF y suspensión por 9 meses de las actividades de asesoría previsional.

Manifiesta que con fecha 16 de mayo de 2018, se recibió en la Superintendencia de Pensiones y en la Comisión para el Mercado Financiero un reclamo presentado contra el Asesor Previsional Sr. Andrés Orrego, por un cierre de pensión que habría presentado irregularidades. Asimismo, con fecha 14 de junio de 2018, se recibió una denuncia presentada por el Sistema de Consultas y Ofertas de Monto de Pensión (en adelante “SCOMP”), complementada con fecha 5 de julio de 2018, que hacían plausible la existencia de irregularidades en cierres de pensión efectuados por el señor Orrego.

Afirma que mediante Resolución UI-IF N° 02 de 2019, la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero resolvió iniciar investigación respecto de don Omar Ruiz Rodríguez para esclarecer los hechos denunciados, formulándosele cargos mediante el Oficio Reservado UI – IF N° 26 de 21 de enero de 2019.

Expresa que el recurrente se encuentra inscrito bajo el N° 294 del Registro de Asesores Previsionales que lleva la SP en conjunto con la



CMF, desde junio de 2009 hasta la fecha. Puntualiza que en el ejercicio de tal función, en el período comprendido entre julio de 2014 y agosto de 2016, proporcionó datos de carácter personal de sus clientes al Sr. Andrés Orrego Arriagada para que éste adulterara Certificados de Ofertas SCOMP versión “Copia”, transformándolos en una versión falsa del “Original” de dicho Certificado, documento necesario para realizar el trámite de aceptación de oferta y selección de modalidad de pensión. De ese modo, aseveró que el investigado realizó un uso no autorizado de la información personal de sus clientes, recopilada producto de la tramitación de sus pensiones, para acelerar los trámites de pensión y con ello obtener la correspondiente comisión por el caso.

Posteriormente, aludió que a través de Oficio Reservado conjunto CMF N°255 y SP N°10.015 de 6 de mayo de 2019, la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones citaron al Recurrente de autos a audiencia, a objeto que formulara las alegaciones que estimara pertinentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de la Comisión para el Mercado Financiero, audiencia que celebró el día 9 de mayo de 2019.

Manifiesta que, durante la investigación, se recopilaron diversos antecedentes que permitieron tener por acreditada la comisión de las infracciones imputadas, así como la participación del señor Ruiz en ellas.

Precisa que los elementos reunidos, llevan a concluir lo siguiente:

i) El reclamante requirió Certificados de Oferta SCOMP en su versión “Copia adulterada” al Sr. Orrego;

ii) El Sr. Orrego confeccionó documentos a partir de cada uno de los Certificados de Oferta SCOMP versión “Copia” entregados por el Investigado, en los que modificó la palabra “Copia” y la reemplazó por “Original”, incluyó un código de barra en cada página (el mismo en todos los casos), y les agregó una carta conductora; generando un nuevo documento correspondiente al Certificado de Oferta SCOMP versión “Copia adulterada”;



iii) El Sr. Orrego proporcionó los Certificados de Oferta SCOMP versión “Copia adulterada” al investigado.

iv) El reclamante pagó un monto de dinero al Sr. Orrego para la obtención anticipada de los Certificados de Oferta SCOMP versión “Copia adulterada”.

Consideró que, en su calidad de asesor previsional, el recurrente se encuentra sujeto al cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la actividad, y en dicho sentido cabe además considerar que conforme a lo dispuesto por la letra d) del artículo 174 del Decreto Ley N° 3.500 los asesores previsionales deben *“Acreditar los conocimientos suficientes sobre materias previsionales y de seguros”*.

Dado lo anterior, no pudo desconocer que el Certificado de Ofertas Original sólo se envía o entrega al afiliado, de modo que cualquier otra fuente o medio para obtenerlo contraviene lo dispuesto en la NCG N° 218.

Asimismo, indicó que accedió indebidamente a un certificado adulterado, en circunstancias que debió obtener un documento que proviniera directamente del afiliado, ya que es sólo éste quien recibe el certificado original, ya sea por correo certificado o solicitando una copia del original al octavo día en la Administradora de Origen, como consta de lo dispuesto por el párrafo cuarto del punto 7 de la Sección IV de la NCG N° 218.

En cuanto al reclamo deducido en esta sede, detalla que la CMF y la SP tienen competencia para conocer y resolver válidamente del procedimiento administrativo sancionatorio, pues conforme lo establecido en el artículo 61 bis y el artículo 176, ambos del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, tanto la CMF como la SP se encuentran expresamente facultadas para ejercer la fiscalización de los asesores previsionales, ámbito de fiscalización que incluye las infracciones que puedan cometer los referidos asesores a la Norma de Carácter General dictada en virtud de la facultad expresamente conferida por el artículo 61 bis de dicho Decreto Ley.



Argumenta que el consejo de la Comisión para el Mercado Financiero y el Superintendente de Pensiones realizaron una correcta calificación jurídica de los hechos por cuanto consta de los descargos formulados en el procedimiento administrativo sancionatorio que el recurrente reconoció expresamente que solicitó certificados de oferta al señor Andrés Orrego y que utilizó dichos certificados, no habiéndose desconocido o desvirtuado los hechos materia de la formulación de cargos.

Así, refiere que se reconoce en el escrito de descargos del reclamante: *“Pues bien, el hacer entrega de los antecedentes de los clientes para dicho objeto, no se puede entender que se está haciendo un mal uso de los datos personales del cliente, toda vez que ello se hace con el objeto de beneficiar al cliente a fin de terminar con el trámite en un período más corto”*.

Postula que la alegación de “engaño” que indica haber sido objeto el reclamante resulta improcedente máxime si se considera que, como se ha dicho, accedió indebidamente a un certificado mediante la obtención irregular del mismo, en circunstancias que jamás debió obtener un documento que no proviniera directamente del afiliado, ya que sólo éste recibe el certificado original, ya sea por correo certificado o solicitando una copia del original al octavo día en la Administradora de Origen.

En tal orden de ideas, sostiene que consta en el procedimiento administrativo sancionatorio que el Sr. Ruiz, en el ejercicio de su función de asesoría tuvo acceso a datos personales de sus clientes, información que envió a un tercero -el Sr. Andrés Orrego- de un modo ajeno al procedimiento que dispone la norma. Consta así en declaración del Reclamante de 29 de agosto de 2018: *“No me acuerdo cuanto le pagué, en algunas ocasiones el Señor Orrego los pasaba sin cobrar, cuando partió el tema para que la gente probara.*

Lo que se hacía era, darle el número y él preguntaba si era ingresado por uno. Nunca hice transferencia al Sr. Orrego, los pagos sólo fueron en efectivo.”



En cuanto a que la resolución sancionatoria reclamada analiza todas las defensas y alegaciones hechas valer por el reclamante señala que:

1) No existió colaboración del Reclamante antes o durante la investigación.

Conforme se consigna en la resolución sancionatoria, el reclamante reconoció su participación en los hechos que le fueron imputados en el Oficio de Cargos en lo que se refiere a obtener certificados del Sr. Orrego, sin proporcionar antecedentes que permitieran aclarar los hechos materia de esta investigación.

2) Alegación respecto de la capacidad económica del reclamante.

En lo que respecta a la capacidad económica del reclamante, se consideró -sobre la base de la información proporcionada por el sistema SCOMP- que, durante el año 2017 por concepto de asesoramiento, ventas de rentas vitalicias y retiros programados, el Reclamante presentó un ingreso de UF 3.049,5.

Puntualiza que el reclamante fue sancionado en definitiva por cuatro casos, dos por infracción al deber de resguardar la privacidad de los datos personales de sus clientes y dos por efectuar cierres de pensión sin documentación original, de modo que, si se consideran estas cifras, se tiene que la multa a aplicar de 100 UF, dividida en 4 casos, da 25 UF por caso.□

3) Alegación de falta de consideración de inexistencia de sanciones previas los 4 años anteriores a la resolución sancionatoria.

Se consigna en la resolución sancionatoria que, al momento de determinar el monto de la sanción, se tuvo a la vista la Resolución Exenta N° 250 de 12 de mayo de 2009 por la que se aplicó la sanción de censura por incumplimiento de la obligación de contratar dentro de plazo la garantía exigida para desarrollar sus operaciones.

En cuanto a ello, se debe tener en cuenta que la resolución sancionatoria se limitó a dar cuenta de un hecho objetivo; en tanto se consignó la referencia a otras sanciones aplicadas por la Comisión a otros asesores previsionales por hechos equivalentes, todo ello,



considerado como un parámetro para ponderar el monto de la multa teniendo a la vista a las diversas personas sancionadas, para lo cual también se evaluó la capacidad económica del infractor, de modo que la sanción no resultara desproporcionada a su situación particular.

4) No existe norma expresa que permita imputar la suspensión provisional de las actividades de asesoría previsional del reclamante a la sanción de suspensión de sus actividades por 9 meses.

TERCERO: Que, el informe de la SP reitera los argumentos de la CMF, y agrega que no solo es inverosímil la afirmación de que el Sr. Ruiz habría actuado en la creencia de que el Sr. Orrego, a quién proporcionó los datos personales de sus clientes, tenía una persona de confianza en la empresa Sonda, sino que confirma la clara infracción de la norma, ya que el certificado solo es "original" en los casos que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la Norma de Carácter General lo establece, por lo que la provisión de datos personales a un tercero, porque el Sr. Orrego *"tenía una amiga en la empresa Sonda y que le entregaba los certificados originales"* ya que con eso *"se aceleró el certificado SCOMP original"*, es precisamente lo que la norma no busca que se produzca y por lo tanto, le repugna y debe sancionar.

Adicionalmente, el reclamante olvida que cuando alega que no hay prueba alguna, se olvida de su declaración prestada con fecha 28 de agosto de 2018, de la que consta lo siguiente *"Yo revisé mis carpetas y son 4 casos en que se aceleró el certificado de SCOMP original. El señor Orrego aceleraba los certificados originales diciendo que tenía una amiga en SONDA... No me acuerdo cuanto le pagué, en algunos ocasiones el Señor Orrego los pasaba sin cobrar, cuando partió el tema para que la gente probara."*

Lo que se hacía era, darle el número y el preguntaba si era ingresado por uno.

Nunca le hice una transferencia al Sr. Orrego, los pagos solo fueron en efectivo (...)



Este aceleramiento lo hice porque mis clientes necesitaban rápido su pago, y que la mayoría era por invalidez. Lo hice por un tema puntual (...)” (énfasis agregado).

A su vez, el Sr. Orrego, a quien el reclamante entregó los datos personales, señaló sobre esto último que las modificaciones a los certificados de oferta SCOMP eran la “(...) *fecha, nombre, dirección de la individualización de la carta conductora del certificado de ofertas SCOMP...*”, información que solo podía ser modificada si el Sr. Ruiz le remitía los Certificados de Ofertas SCOMP Copia y las Solicitudes de Ofertas al Sr. Orrego, que eran imprescindibles para efectuar la adulteración.

Aún más, resulta doblemente inaceptable la defensa del Sr. Ruiz, en consideración a que el asesor sancionado accedió indebidamente a un certificado mediante la obtención irregular del mismo, en circunstancias que jamás el sancionado debió obtener un documento que no proviniera directamente del afiliado, ya que solamente éste recibe el original o lo puede solicitar, por lo que resulta inevitable llegar a la conclusión de que el Sr. Ruiz infringió lo dispuesto en los incisos once y doce del artículo 61 bis del D.L. N° 3.500 de 1980 y número 1.1. de la Norma de Carácter General N° 221 de la CMF, y en el Libro V, Título VIII, Capítulo II, Número 1, Letra b) del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, por cuanto no resguardó la privacidad de la información de 29 de sus clientes (teniendo presente que, con respecto a 27 casos, atendido el tiempo transcurrido, se extinguieron las atribuciones sancionatorias), haciendo uso no autorizado de sus datos personales.

En razón de lo anterior, refiere que no hay fundamento legal ni normativo para considerar que los casos en cuestión y la supuesta “norma infringida” es una sola, ya que los reproches efectuados son claramente distintos, teniéndose presente que la Ley N° 19.934, que introdujo el artículo 61 bis al D.L. N° 3.500, puso como un elemento esencial del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, el resguardo de la privacidad y la protección de los datos personales, que



son garantías constitucionales, conforme al artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que los actos administrativos están revestidos de la presunción de legalidad, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 3° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos del Estado, presunción de carácter legal que puede ser desvirtuada, siendo de carga de la reclamante acreditar la ilegalidad invocada.

En este sentido, el control que en esta sede se puede realizar, sólo se basa en la legalidad o no del acto reclamado, sin poder modificar lo resuelto en caso de que el acto impugnado se ajuste al derecho vigente.

QUINTO: Que, para poder pronunciarse sobre la ilegalidad del acto reclamado, es menester considerar los hechos denunciados por la recurrente, los que consisten en que la CMF y la SP han formado según el reclamante una Comisión Integrada por el Consejo de la CMF y el Superintendente de Pensiones, atribuyéndose la competencia y jurisdicción, para conocer y sancionar hechos ocurridos, con anterioridad a la dictación de la Ley N° 21.000, lo cual la transforma en una Comisión especial, lo que expresamente prohíbe el artículo 19, N° 3, inc. 5. de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, en este sentido, es menester considerar que se sancionó al recurrente por las siguientes infracciones:

a) Infracción a lo dispuesto en los incisos once y doce del artículo 61 bis del D.L. N° 3.500 de 1980 y número 1.1. letra b) de la Norma de Carácter General N° 221 de la CMF; y en el Libro V, Título VIII, Capítulo II, Número 1, Letra b) del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980, ya que el Recurrente, en el periodo de julio de 2014 a agosto de 2016, no resguardó la privacidad de la información de 29 de sus clientes, haciendo uso no autorizado de sus datos personales.

b) Infracción al número 7 de la Sección IV, a la Sección V, a la Sección VI, el número 2 de la Sección XII de la NCG N° 218 de la CMF;



y en el Libro III, Título II, Letras E, F, G y M capítulo II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980, en tanto el Recurrente, en el periodo de julio de 2014 a agosto de 2016, efectuó en, 29 casos, la aceptación de oferta y selección de modalidad de pensión sin la utilización de Certificados de Ofertas SCOMP versión “Originales”.

En este sentido, se lograron acreditar en el procedimiento administrativo, los siguientes hechos:

- El reclamante requirió Certificados de Oferta SCOMP en su versión “Copia adulterada” al Sr. Orrego;

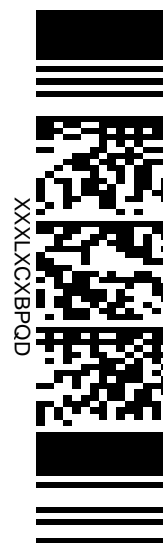
- El Sr. Orrego confeccionó documentos a partir de cada uno de los Certificados de Oferta SCOMP versión “Copia” entregados por el Investigado, en los que modificó la palabra “Copia” y la reemplazó por “Original”, incluyó un código de barra en cada página (el mismo en todos los casos), y les agregó una carta conductora; generando un nuevo documento correspondiente al Certificado de Oferta SCOMP versión “Copia adulterada”;

- El Sr. Orrego proporcionó los Certificados de Oferta SCOMP versión “Copia adulterada” al investigado.

- El reclamante pagó un monto de dinero al Sr. Orrego para la obtención anticipada de los Certificados de Oferta SCOMP versión “Copia adulterada”.

Por último, se debe considerar que no existe controversia en cuanto a los hechos (ya que son reconocidos por la reclamante) y que se debe precisar que respecto de los hechos imputados al investigado y acreditados, existieron en cada cargo 27 casos en que las conductas se realizaron hace más de 4 años contados desde la resolución sancionatoria y que no fueron considerados a efectos de la sanción de multa de 100 UF y suspensión por 9 meses de las actividades de asesoría previsional.

SÉPTIMO: Que, resulta aplicable en la especie lo dispuesto por la letra d) del artículo 174 del Decreto Ley N° 3.500, según el cual los asesores previsionales deben *“Acreditar los conocimientos suficientes sobre materias previsionales y de seguros”*. En concreto, la reclamante



no puede desconocer que el Certificado de Ofertas Original sólo se envía o entrega al afiliado, de modo que obtenerlo por cualquier otra fuente o medio contraviene lo dispuesto en la NCG N° 218.

Por otro lado, la reclamante infringe lo dispuesto en los incisos once y doce del artículo 61 bis del D.L. N° 3.500 de 1980 y número 1.1. de la Norma de Carácter General N° 221 de la CMF, y en el Libro V, Título VIII, Capítulo II, Número 1, Letra b) del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, por cuanto no resguardó la privacidad de la información de 29 de sus clientes.

OCTAVO: Que, en el caso de autos, el acto administrativo ha sido dictado por la autoridad competente, legalmente facultada para fiscalizar, investigar y sancionar a la recurrente, respetándose el procedimiento y las garantías de la misma, quien formuló alegaciones y defensas ante la autoridad, que fueron descartadas, según da cuenta el informe consignado en fundamento segundo de esta sentencia, en que se reproducen los fundamentos del rechazo de las alegaciones.

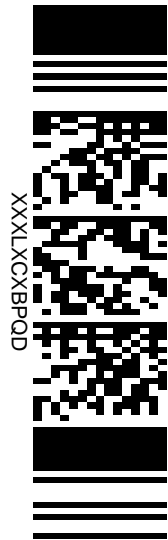
NOVENO: Que, en consecuencia, no existe acto ilegal que se pueda imputar a la recurrida, la que ha actuado en conformidad a las normas que la regulan, y dictando el acto administrativo fundado en un procedimiento legalmente tramitado.

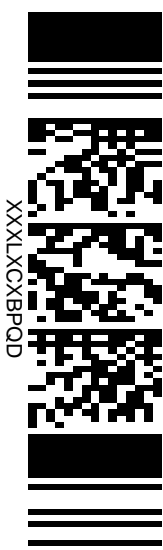
Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los incisos once y doce del artículo 61 bis y artículo 174 del D.L. N° 3.500 de 1980, se declara que se **RECHAZA** el recurso de reclamación deducido don **Omar Alejandro Ruiz Rodríguez** en contra de la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendente de Pensiones.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del abogado integrante Sr. Cristián Lepin Molina.

N°Contencioso Administrativo-389-2019.





XXXLXCXBPQD

Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Antonio Ulloa M., Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Cristian Luis Lepin M. Santiago, ocho de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a ocho de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

